



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de octubre de 2024

Vistos los autos: "General Motors de Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 201/229 vta. se presenta General Motors de Argentina S.R.L. e inicia acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Santa Fe, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de exigirle el pago de diferencias en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, con sustento en lo dispuesto en el art. 6°, párrafo 3°, de la ley 3650, incorporado por el art. 9° de la ley 13.286, art. 1° del decreto 2707/2012 y en las resoluciones generales de la Administración Provincial de Impuestos 14/2012 y 22/2012, todos de la Provincia de Santa Fe.

Ello, en relación a las actividades de "venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos", "venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos" y "servicios empresariales n.c.p.", por considerar a la actora como radicada fuera de la mencionada provincia.

Dice que la normativa referida se contrapone con las previsiones de los arts. 8°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75, incisos 1°, 10 y 13, y 126, todos ellos de la Constitución Nacional, por lo que solicita su declaración de inconstitucionalidad. Expone los antecedentes de derecho y de hecho en los que basa la presente acción y las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la admisibilidad de la acción declarativa.

Relata que General Motors es una empresa con larga trayectoria en el mercado automotriz de la República Argentina, cuya planta industrial se encuentra ubicada en la localidad de Alvear, Provincia de Santa Fe, donde se fabrican los modelos de industria nacional. Refiere que el Estado provincial demandado entiende que la jurisdicción sede de la accionante, a los efectos del Convenio Multilateral, se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, por lo que, respecto a las actividades no industriales de la actora, le reclama diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos, basadas en su presunta falta de radicación en territorio santafesino.

Sostiene que la legislación provincial cuestionada la ha sometido a un tratamiento discriminatorio contrario a la cláusula comercial de la Constitución Nacional, y que, al aplicarle alícuotas incrementadas en relación a la parte de sus ingresos pretendidamente generados fuera de la Provincia de Santa Fe, se ha exorbitado la competencia provincial. Agrega que con esto se ha constituido una aduana interior, ya que con la pretensión de "beneficiar" a los contribuyentes locales, se perjudica a aquellos que realizan actividades e introducen bienes desde el exterior. Asimismo, destaca que, de convalidarse lo antes expuesto, se estaría afectando el principio de igualdad, que goza de tutela constitucional.

Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

Finalmente, a fs. 239/252, acompaña copia de la resolución 01-9/2017 de la Administración Provincial de Impuestos.

II) A fs. 232 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 254/255 el



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprendían de las resoluciones 15-2/2014, 12-5/2015 y 1-9/2017 de la Administración Provincial de Impuestos, y estableció que la actora tributara en lo sucesivo idéntica alícuota a la prevista en la legislación tributaria local para aquellos contribuyentes que desarrollaran la misma actividad en establecimientos ubicados en la Provincia de Santa Fe; todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 276/288 vta. la Provincia de Santa Fe contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, alega que la actora solo postula genéricamente una discriminación, sin discernir de qué modo se concretaría en un "detrimento económico sustancial y relevante". Luego aduce que la alícuota cuestionada no es exagerada, y que produce una restricción en la circulación económica tan razonable como otras (peajes y tasas, entre otras). En consecuencia, dice, no se conculca la garantía de igualdad ante las cargas públicas.

Aduce que la creación de categorías legales basadas en la ubicación territorial del contribuyente, no produce necesariamente un resultado discriminatorio. Afirma que no se violan los principios de razonabilidad e igualdad. Refiere que el modo en que la provincia demandada ha ejercido su potestad tributaria, en modo alguno colisiona con la cláusula de comercio

.

En este contexto, dice, las normas fiscales impugnadas (artículo 6°, párrafo tercero, de la ley impositiva anual y el decreto 2707/2012) no pueden ser tildadas de "discriminatorias". Por último, expone los motivos por los que considera que están ausentes los presupuestos de la acción declarativa.

IV) A fs. 378 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda planteada. Por último, a fs. 379, se pasan los autos para dictar sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 254/255, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley local 3650 (modificada por la ley 13.286) y el decreto provincial 2707/2012, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En ese sentido, en el presente caso se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre



Corte Suprema de Justicia de la Nación

los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver notificación de fs. 83/85 vta., resoluciones de la Dirección General de Rentas provincial 15-2/2014 -fs. 98/100 vta.-, 12-5/2015 -fs. 139/145- y 01-9/2017 -fs. 240/251-; todas ellas obrantes también a fs. 1198/1200, 1213/1215 vta., 1407/1419 y 1527/1532 vta. del expediente administrativo 13301-0242064-6, respectivamente; así como la intimación del 25 de agosto de 2014, agregada en copia a fs. 186/186 vta., que se encuentra también a fs. 6 del expediente administrativo 13301-0247096-2) demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que en su mérito, en el caso concreto, la aplicación de la normativa local impugnada, al gravar con la alícuota del 4,5% las actividades ya referidas de la actora, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por

esta Corte a su respecto, en el presente proceso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a las actividades desarrolladas por contribuyentes radicados en otra jurisdicción, en beneficio de las realizadas por contribuyentes radicados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por General Motors de Argentina S.R.L. contra la Provincia de Santa Fe. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 6°, párrafo 3°, de la ley 3650 (incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286) y del artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecían una alícuota más gravosa en el impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades desarrolladas por contribuyentes radicados fuera de esa provincia, como así también la de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa (notificación del 25 de junio de 2014, Resoluciones de la Dirección General de Rentas provincial 15-2/2014 y 12-5/2015, intimación del 25 de agosto de 2014 y Resolución 01-9/2017), exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de esta causa. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).



CSJ 743/2017

ORIGINARIO

General Motors de Argentina S.R.L.
c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General
de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **General Motors de Argentina S.R.L.**, representada por sus letrados apoderados, Dres. **Sebastián Leandro Nordemann y Luciana Martina Virgile**, con el patrocinio letrado de los Dres. **Walter César Keiniger y Stella Maris Crespín**.

Parte demandada: **Provincia de Santa Fe**, representada por su Fiscal de Estado, Dr. **Pablo Alberto Saccone**, y los letrados apoderados, Dres. **Diego López Olaciregui, Rubén Fernando Boni y Beatriz Dora Nofal**.